“Ramirez, Corina Cristina s/ querella”.

C. 78866/II

San Isidro, 06 de marzo de 2015.

AUTOS Y VISTOS: Para resolver en la presente incidencia el recurso de apelación deducido contra el auto que luce en copia a fs. 52/53vta.;

Y CONSIDERANDO:

El juez Juan Eduardo Stepaniuc dijo:

I. Viene el presente incidente a conocimiento de esta Alzada en virtud del recurso de apelación deducido por el querellante, Gerardo Osvaldo Amieiro, contra el auto dictado por el juez titular del Juzgado en lo Correccional nro. 4 deptal., Dr. Juan Facundo Ocampo, mediante el que resolvió declarar inadmisibile la querella impetrada contra Corina Cristina Rodríguez por los delitos de calumnias e injurias (art. 383 del Código Procesal Penal).

Con la pretensión de juicio especial por calumnias e injurias deducida por parte de Gerardo O. Amierio contra Corina C. Rodríguez se imputó que el día 26 de junio de 2014 en sesión ordinaria del Concejo Deliberante del Partido de San Fernando, la segunda, concejal que integra dicho órgano manifestó: “...a mi me gustaría saber con qué moralidad, qué ética y bajo qué concepto el señor concejal Amieiro defiende hoy a los 140 vecinos que supuestamente, hacen un reclamo justo y nosotros...decía que me gustaría saber bajo qué ética el señor concejal Amieiro, que cobra tres sueldos –supera a sus compañeros hasta en eso- puede defender a los vecinos. Cobra un sueldo de la Provincia de Buenos Aires como jubilado de la Legislatura, un sueldo como funcionario actual y otro sueldo que se le paga acá como porcentual de su dieta. Que explique él con qué moralidad defiende al pueblo al que le robó durante dieciséis años al que le sigue robando...”.

El Juez “a quo” declaró inadmisibile la querella impetrada en los términos del artículo 383 del Código Procesal Penal. Fundamentó su decisión en que los dichos de la querellada ocurrieron en el ámbito de la sesión del Concejo Deliberante y en que allí quedó resuelto el conflicto, ya que en esa ocasión la concejal Ramírez aclaró sus dichos cuando manifestó: “...aclararé mis palabras. Parece que la palabra robar tiene susceptibilidades. Pero también se puede robar a alguien cuando se le roba a alguien los sueños, la capacidad de crecimiento, la posibilidad de salir adelante. Se le roba a alguien cuando, en realidad, no se permite a un gobierno gestionar a favor de aquellos que más lo necesitan. La interpretación de la palabra está en la susceptibilidad de cada uno. Si en algo he herido

la susceptibilidad de alguien, pido disculpas. Pero se trata de una palabra amplia. Yo no puedo hacerme cargo de la interpretación que él le dio...”.

El querellante interpuso recurso de apelación. Entiende que los dichos aclaratorios de la querellada no pueden entenderse como una disculpa sino, por el contrario, más agraviantes. Y en ese sentido reclama el avance del proceso. Por otra parte, cuestionó que se haya considerado como fundamento de la resolución impugnada, el hecho de no haber replicado los dichos de aquella que se interpretaron como disculpa.

II. El recurso de apelación fue deducido tempestivamente por el querellante, conforme el derecho que posee, con indicación de los motivos de agravio y sus fundamentos. La resolución atacada no tiene prevista expresamente la impugnación, sin embargo, los motivos de la decisión llevan a entender que causa gravamen irreparable pues es equiparable a sentencia definitiva sobre el fondo del asunto. Es por ello que postulo declarar su admisibilidad (arts. 394, 421, 433, 439, 441 y 442 del Código Procesal Penal).

III. Luego de analizado el objeto procesal de la querrela presentada y la resolución impugnada a partir de las constancias del presente incidente, considero que la decisión adoptada por el juez “a quo” se basa en una fundamentación aparente y no es la correcta. No obstante ello, los agravios del recurrente tampoco tendrán acogida por las siguientes razones.

En primer lugar corresponde recordar que el estado municipal está garantizado en todo el territorio nacional por la Carta Magna bajo el sistema representativo y republicano (artículo 5).

La Constitución de la Provincia de Buenos Aires establece en el artículo 190 -sección VII del régimen municipal-: “La administración de los intereses y servicios locales en la Capital y cada uno de los partidos que formen la Provincia, estará a cargo de una Municipalidad, compuesta de un departamento ejecutivo unipersonal y un departamento deliberativo, cuyos miembros....”.

En el marco del sistema republicano, caracterizado por el equilibrio entre los poderes que lo componen, los representantes que integran el Poder Legislativo gozan de indemnidad que garantiza su desempeño con libertad e independencia. La Constitución Nacional establece en el artículo 68: “Ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador”. En igual sentido la CPBA en el artículo 96 prescribe: “Los miembros de ambas Cámaras son inviolables por las opiniones que manifiesten y votos que emitan en el desempeño de su cargo. No hay autoridad alguna que pueda procesarlos y reconvenirlos en ningún tiempo por tales causas”.

Como derivación de todo ello el decreto-ley 6769/58 -ley organica de las municipalidades de la provincia de Buenos Aires- en su artículo 85° reza: “los concejales no pueden ser interrogados o acusados judicialmente por las opiniones que emitan en el desempeño de su mandato”.

Sobre la cuestión ahora bajo análisis la C.S.J.N. ha dicho: “... 12) Que la inmunidad de las opiniones de los legisladores para el desarrollo de la función legislativa se revela inmediatamente como necesaria para el cumplimiento de tales fines, por lo tanto, se debe considerar a dicha inmunidad en el sentido más amplio y absoluto (Fallos: 1:297, considerando 1°). 13) Que no obstante lo antes dicho respecto a la citada disposición, cabe precisar la terminología utilizada distinguiendo, conforme su naturaleza, entre la inmunidad e indemnidad de ciertos funcionarios, pues mientras a través de la primera se impide toda coerción sobre la persona del legislador sin un previo procedimiento a cargo de la respectiva cámara, la segunda, en cambio, opera cuando los actos o ciertos actos de la persona directamente quedan fuera de la responsabilidad penal (considerando 8° del voto disidente del juez Fayt, en el precedente de Fallos: 321:2617), o sea que son atípicos. Estas últimas excepciones sólo pueden ser establecidas por la Constitución Nacional, así nuestro máximo texto legal se ocupa de la indemnidad de las opiniones parlamentarias en el art. 68. En tal sentido, si bien adherimos a los argumentos de esta Corte en tanto que las previsiones de la norma citada tienen una elevada significación institucional, al extremo de que resulta lícito afirmar que integran el sistema representativo republicano (Fallos: 169:76, considerando 4°), se advierte que la Constitución Nacional otorga, mediante el art. 68, indemnidad a las opiniones parlamentarias siendo éstas de carácter funcional, pues lo que en verdad se halla fuera del alcance de la ley penal son los actos y no el actor por su calidad de tal, pues aun cuando el legislador cesare en su mandato sigue amparado por la indemnidad del acto...” (“Cavallo, Domingo Felipe s/ recurso de casación” del 19/10/2004, votos de los Ministros Zaffaroni y Highton de Nolasco”).

Lo expuesto, conduce sin lugar a dudas a concluir que los hechos en los que se basa el querellante para realizar su acusación no pueden constituir delito, pues la acusación en el marco de la acción privada deducida tiene como objeto los dichos de un concejal durante una sesión ordinaria del Concejo Deliberante del Partido de San Fernando.

Por otra parte, a mayor abundamiento, cabe destacar como lo sostuve en Causa nro. 72990/IIa."incidente de apelación en causa 464 "Armaleo, Miguel Angel s/ calumnias e injurias" del Juzgado en lo Correccional nro. 6 Deptal." resuelta el 22 de marzo de 2010, que para juzgar si una persona incurre en el delito de injurias, es decir deshonorar o desacreditar a una persona física determinada intencionalmente, debe descartarse que se trate de expresiones referidas a asuntos de interés público o que no sean asertivas.

Incluso, tampoco configurarían delito de injurias los calificativos lesivos del honor cuando guardasen relación con un asunto de interés público. Ello se colige de la nueva redacción del artículo 110 del Código Penal, establecida por Ley 26551.

Con la reforma de ésta última ley -originada en el compromiso del Estado argentino con el cumplimiento de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos- se advierte claramente que el Legislador ha limitado las acciones que configuran el delito de injurias, excluyendo las expresiones referidas a asuntos de interés público o que no sean asertivas. En otras palabras, se ha optado por no establecer sanciones de carácter penal, para aquellas expresiones que aún pudiendo lesionar el honor de alguna persona se realicen en el marco del interés público o con falta de asertividad.

En ese sentido, desde mi punto de vista, los dichos en los que se basa la imputación guardan relación con asuntos de interés público, pues el altercado verbal ocurrió, reitero, en una sesión del Consejo Deliberante en la que se trataba la política impositiva municipal. Además, la querellada se refirió de manera despectiva a la administración anterior del Sr. Amieiro como intendente, es decir, al ejercicio del cargo ejecutivo de mayor jerarquía en el ámbito Municipal, cuestión de interés público sin lugar a dudas y sobre la que aquí no corresponde emitir juicio alguno.

En síntesis, a luz de la nueva redacción del artículo 110 del Código Penal, las expresiones en cuestión, aún en el caso que importen lesión al honor del querellante, no configuran el delito de injurias, y son atípicas.

Ahora bien, el Juez en lo Correccional resolvió declarar inadmisibles las querellas presentadas con mención del artículo 383 del ritual, que establece los requisitos formales para la admisibilidad de una querrela. No fueron señaladas omisiones o carencias en ese sentido en la decisión impugnada, razón por la que no se advierte relación entre los motivos, la resolución y la normativa citada.

Sin embargo, de acuerdo a todo lo antes expuesto, tratándose de un procedimiento especial que tiene su inicio en la etapa de juicio, en el marco establecido por los artículos 341, 393 y 435 de la ley de forma, postulo revocar la resolución impugnada y sobreseer totalmente a la querellada Corina Cristina Rodriguez, sin costas, en orden a los hechos por los que presentó querrela en el presente proceso Gerardo Osvaldo Amieiro (artículos 68 de la CN; 96 de la CPBA; 110 -según Ley 26551- del Código Penal de la Nación; 85 del decreto-ley 6769/58 -ley organica de las municipalidades de la provincia de Buenos Aires-; 323 inciso 3, 530, 531 del Código Procesal Penal).

El juez Leonardo G. Pitlevnik dijo:

Si bien entiendo que formalmente cabría resolver a través de la admisibilidad cuestiones que no resultan estrictamente formales, lo cierto es que tratándose de un hecho

que a todas luces no se adecua a un tipo penal, resulta razonable, en el marco de un proceso especial como lo es el de acción privada, la decisión adoptada por mi colega preopinante y es por ello que adhiero a su voto por los fundamentos que expone.

Por ello el Tribunal RESUELVE:

I. DECLARAR ADMISIBLE el recurso de apelación deducido por el querellante contra el auto que luce en copia a fs. 52/53vta. (arts. 394, 421, 433, 439, 441 y 442 del Código Procesal Penal).

II. REVOCAR la resolución impugnada y **SOBRESEER TOTALMENTE A LA QUERELLADA CORINA CRISTINA RODRIGUEZ**, sin costas, en orden a los hechos por los que presentó querrela en el presente proceso Gerardo Osvaldo Amieiro (artículos 68 de la CN; 96 de la CPBA; 110 -según Ley 26551- del Código Penal de la Nación; 85 del decreto-ley 6769/58 -ley organica de las municipalidades de la provincia de Buenos Aires-; 323 inciso 3, 530, 531 del Código Procesal Penal).

Regístrese y devuélvase al órgano de origen, encomendándose las restantes notificaciones que pudieren corresponder. Sirva lo proveído de atenta nota de envío.

FDO: JUAN E. STEPANIUC- LEONARDO G. PITLEVNIK

Ante mí: ADRIANA R. ERNAGA